



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA V

EXPTE. N° 60185/2022

“SIMMERMACHER, JORGE
AUGUSTO (TF 47358-I) c/
DIRECCION GENERAL
IMPOSITIVA s/ RECURSO
DIRECTO DE ORGANISMO
EXTERNO”

Buenos Aires, de octubre de 2024.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la resolución de fojas 90/92 la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la excepción de nulidad y el recurso de apelación interpuesto por el actor y, en consecuencia, confirmó la resolución dictada el 15/09/2016 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI, a través de la cual se había determinado de oficio la responsabilidad solidaria del Sr. Jorge Augusto SIMMERMACHER respecto de las obligaciones tributarias de la firma Sueños Trasandinos SA, en el impuesto a las ganancias -por el período fiscal 2009-. Impuso las costas a la vencida.

Para así decidir, señaló que de las constancias administrativas surgía que el accionante había sido apoderado de las cuentas bancarias de Sueños Trasandinos SA y que, esa firma (deudora principal de la obligación tributaria), había incumplido la intimación de pago al respecto del impuesto a las ganancias. También destacó que era administrador de esa sociedad en el periodo mencionado. Aquel actuaba en nombre y representación de la firma respecto de “[...] todos sus negocios y asuntos de orden administrativo, comercial, industrial, judicial y bancaria, cualquiera sea su naturaleza y la jurisdicción que corresponda [...]”.

A su vez, recordó que el artículo 8 de la Ley N° 11.683 establecía que aquellos responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6 (dentro de los cuales se hallaba el actor), eran solidariamente responsables con los deudores del tributo.

Sobre esa base, concluyó que el accionante participaba activamente en el giro comercial de la empresa, y que no podía abstraerse de la responsabilidad generada por el incumplimiento de las obligaciones tributarias durante su gestión. Máxime, en la medida en que no había demostrado ninguna circunstancia que permita excusarlo de responsabilidad.

Fecha de firma: 08/10/2024

Firmado por: JORGE ALEMANY, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GUILLERMO FABIO TREACY, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: PABLO GALLEGOS FEDRIANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO ALBERTO VAZQUEZ, PROSECRETARIO DE CAMARA



#37192603#429819743#20241003121618626

II.- Que contra esa decisión el actor interpuso recurso de apelación a fojas 98, y expresó agravios a fojas 105, los que fueron replicados a fojas 110/114 por su contraria.

En su breve presentación, manifestó que la resolución recurrida era arbitraria ya que -a su entender- de las constancias de la causa surgía que su parte no tenía facultades para decidir y/o ejecutar pagos en nombre de la sociedad, por lo que mal podía ser responsable en forma solidaria. Además, sostuvo que dicha responsabilidad era de interpretación restrictiva y excepcional, y que sólo podía ser aplicada a quienes tengan efectivamente posibilidades de gestionar a la persona jurídica contribuyente, lo que no ocurría en su caso.

Finalmente, se agravió de la inversión de la carga probatoria y sostuvo que el Fisco Nacional era quien debía probar la procedencia de la extensión de responsabilidad.

III.- Que corresponde ingresar al análisis del recurso interpuesto por la parte actora en cuanto a la cuestión de fondo.

III.1.- En cuanto a este punto, cabe señalar que los agravios del recurrente se centran en la valoración que el Tribunal Fiscal de la Nación hizo de la prueba recolectada en el procedimiento administrativo. Ahora bien, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley N° 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (esta Sala, in re “Del Buono, Jorge Luis” del 15/03/2007, Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.” del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.” del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; entre otros). Tal principio, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Del Buono”, cit.).

Es decir que, la ponderación de los aspectos de hecho es una atribución del Tribunal Fiscal y resulta en principio irrevisable en esta instancia (doctrina de Fallos 300:985). Por consiguiente, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 1/11/2007, entre otros).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V

III.2.- En lo que respecta a este caso, no se advierte que la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal *a quo* haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. En efecto, el actor sólo efectúa meras manifestaciones dogmáticas respecto a que el Tribunal Fiscal de la Nación consideró de forma arbitraria que cabía extender la responsabilidad a su parte por haber sido apoderado de las cuentas de la firma Sueños Trasandinos SA (deudora principal).

En este orden de ideas, resulta necesario puntualizar que el tribunal *a quo* valoró que no resultaba controvertido que el Sr. SIMMERMACHER “[...] era apoderado de las cuentas bancarias de las que la firma era titular y administrador de la sociedad en el año bajo examen [...] quedando plasmado en el Acta de Directorio N° 4 de fecha 12 de octubre de 2009, la ratificación por parte [d]el Presidente de la firma del ‘Poder General Amplio de Administración y Disposición de bienes’ otorgado mediante Escritura del 18 de febrero de 2009 a favor del Sr. Jorge Augusto Simmermacher para que ‘en nombre y representación de la sociedad intervenga en todos sus negocios [...]’”. Dichas constancias obran a fojas 26, 29 y 32 del expediente administrativo.

A lo expuesto cabe agregar que, en efecto, el artículo 6, inciso d) de la Ley N° 11.683 establece que están obligados a pagar el tributo al Fisco “[l]os directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 5°.” Asimismo, el artículo 8, inciso a) dispone que aquellos responsables enumerados en los primeros cinco incisos del artículo 6 responden solidariamente con los deudores del tributo.

Debido a ello, los argumentos de la parte actora relativos a que el Tribunal Fiscal de la Nación no valoró adecuadamente las constancias de la causa, y que resulta improcedente la extensión de responsabilidad a su parte, deben ser desestimados. Ello así, en tanto resultó acreditado que el accionante era representante de la sociedad deudora de la obligación tributaria incumplida y que, además, se encuentra incluido -de conformidad con lo previsto en la norma citada- dentro de los sujetos que deben responder de forma solidaria (en sentido análogo, esta Sala in re [“Simonetti Marta c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”](#) Expte. N° 54910/2018, del 22/11/2023). Por lo tanto, debido a que se han valorado los elementos probatorios aportados a la causa y que la decisión se corresponde con lo previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley N° 11.683, no se advierte arbitrariedad en resolución apelada.



III.3.- Finalmente, corresponde también desestimar el agravio relativo a la inversión de la carga probatoria, en la medida de que el inciso a) del artículo 8 de la citada ley así lo prevé en cuanto dispone expresamente que “[n]o existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente”, extremo no acreditado por el recurrente.

IV.- Que por los motivos expuestos, corresponde: **1)** Rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, y confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación; **2)** Con costas de esta instancia, toda vez que no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota (artículo 68, primera parte, del CPCCN).

Todo lo cual, **ASÍ SE RESUELVE.**

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvanse.

Guillermo F. Treacy

Jorge Federico Alemany

Pablo Gallegos Fedriani

